

# Familia, política e inseguridad pública

Antonio Sandoval Ávila\*

## Resumen

En la familia se conforma la “cultura cívico-política” mediante la transmisión e internalización de determinados valores: formas de convivencia, responsabilidad ciudadana, etc. La familia recibe las influencias de la sociedad y lo que en ella pasa se extiende a la sociedad. La crisis económica está incidiendo en el surgimiento de familias inestables, cuya desarticulación se refleja en el incremento de la violencia doméstica y social que son una expresión indirecta de la crisis socioeconómica que se refleja en las familias. El objetivo del trabajo es enfatizar la importancia que la familia tiene como la principal estructura de prevención del delito en la sociedad.

**Palabras clave:** Pobreza, familias inestables, violencia familiar, violencia social.

## Abstract

The families shape the “civic-political culture” through the transmission and internalization of certain values: sharing living, civic responsibility, and so on. The family is influenced by society and what happens in the families

---

\* Profesor-investigador del Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Perfil Promep.

extends to society. The economic crisis influences the arising of unstable families, whose disruption is reflected in the increase of family and social violence that are an indirect expression of the socioeconomic crisis that is reflected in families. The aim of this study emphasizes the importance of the family as the main structure of crime prevention in society.

**Keywords:** Poverty, unstable families, family violence, social violence.

## Introducción

El trabajo surge como una reflexión derivada de la observación de la violencia doméstica generada por el deterioro de las condiciones materiales de vida de las familias empobrecidas del país, que son mayoría, y que se extiende a la sociedad contribuyendo a incrementar la inseguridad pública. El bajo nivel de vida de las familias afecta una de sus principales funciones como es la de la socialización de los hijos, mediante la cual transmiten un capital cultural de gran importancia para el desarrollo e integración social de los nuevos miembros de la sociedad. Si las familias no cumplen adecuadamente con esta función, se convierten en el principal agente motivador de conductas antisociales.

Es en el ámbito cotidiano familiar, donde se entrecruzan los macro procesos con los micro procesos. Donde confluyen todas las dimensiones: social, económica, política, cultural, etc. En donde se articulan la estructura económica y la superestructura ideológico-política. En donde se reproducen físicamente los individuos que a su vez garantizan la reproducción de la sociedad. En donde los problemas cotidianos se articulan con la responsabilidad de la conducta humana en cuanto a la convivencia armónica entre los hombres y de éstos con su entorno físico (Solano, 1992: XIV-XVIII, 25-32).

En la familia se conforma la “cultura cívico-política” mediante la transmisión e internalización de determinados valores: formas de convivencia democrática, solidaridad, participación, responsabilidad ciudadana, etc. La crisis económica y política que estamos viviendo está incidiendo en el surgimiento de familias inestables, cuya desarticulación se refleja en la tensión psicosocial y en la violencia familiar y social, lo cual constituye una seria amenaza para la gobernabilidad y la estabilidad política del país.



Lo cotidiano, que precisamente por ser tal no ha sido valorado como merece, hoy se ha vuelto visible como consecuencia de la ruptura que ha sufrido la sociedad, y que se manifiesta en un alza tal de la criminalidad, que la inseguridad pública en sus múltiples modalidades, se ha vuelto ya un problema de seguridad nacional. Al no considerar debidamente la experiencia diaria de la gente y los problemas que presenta la vida cotidiana, se olvida la dimensión política de la familia, es decir, su capacidad para formar ciudadanos responsables y su potencialidad en la prevención del delito (Castells, 1999 vol. III: 369-374).

### El modelo de desarrollo capitalista neoliberal

El capitalismo neoliberal que maneja la economía transnacional, desempeña un papel clave en la configuración no sólo de la economía mundial, sino también de la sociedad global en su conjunto. Con miras a la realización de la utopía del anarquismo mercantil, se sirve de los Estados nacionales eliminando las trabas a la inversión, de los sindicatos, de la normatividad ecológica, asistencial y fiscal (Beck, 1998: 16, 20).

En México, hasta hace pocos años el capitalismo, con las deficiencias que fueren, había asumido importantes responsabilidades sociales como la salud, los riesgos profesionales, la cobertura de fondos de pensiones, etc., responsabilidades que propendían al bienestar de las familias de la población trabajadora. Ahora, en los ajustes que se han hecho a los sistemas de seguridad social privan, antes que los intereses de la población beneficiaria, los intereses del gran capital, especialmente el financiero, lo que provoca ineficiencias y sesgos perjudiciales para los asegurados en el corto, mediano y largo plazo (Osorio, 1997: 9-10).

El desmantelamiento de la seguridad social como institución pública de protección social de los trabajadores, no obedece a adecuaciones pragmáticas dictadas por las necesidades de la política económica o por fallas institucionales, sino al objetivo de refundar la política social de acuerdo con el proyecto ideológico global neoliberal de reorganización de la sociedad. Lo cual implica la destrucción de los valores y los derechos respecto a la justicia social así como de las instituciones encargadas hasta ahora del bienestar y la satisfacción de las necesidades sociales en el marco del Estado benefactor, cuyo desmantelamiento está provocando una inversión de las conquistas sociales ganadas con anterioridad (Laurell, 1997: 9-20). La desregulación del mercado a gran escala, ha llevado a una individualización y flexibilización tal del trabajo, que los trabajadores se han quedado solos para defender sus derechos laborales ante el gran capital (Vargas, 2002: 7).

En lugar de la red de seguridad social se implantó una concepción según la cual el bienestar es un asunto privado, responsabilidad de los individuos cuyas necesidades deben ser resueltas en el ámbito de la familia en el mercado de los servicios privados. Lo anterior ha significado un retroceso que ha afectado principalmente a las capas medias y a los grupos más pobres de la sociedad (Filgueira, 1999: 163,

205). De esta manera, se priva de una red de seguridad a la gente que no puede alcanzarla de forma individual (Castells, 1999 vol. III: 378). Las políticas económicas implementadas sólo han beneficiado a unos pocos mientras la gran mayoría de las familias se han visto perjudicadas por un progresivo deterioro de sus condiciones materiales de vida generado por la contracción del empleo, la caída del salario real y por ende del ingreso familiar (Sotelo, 2003: 1)

## El cambio social y la familia

La sustitución del estado de bienestar por un modelo de desarrollo capitalista neoliberal condujo a la exclusión social. El deterioro del mercado de trabajo en México ha sido la consecuencia más desastrosa del nuevo modelo económico con el que se ha acentuado el desempleo y como consecuencia de ello se ha masificado la pobreza. Detrás de la pobreza hay una aguda desigualdad que la genera. El mapa de las desigualdades se extiende desde las posibilidades de acceso a la vivienda, al agua potable, al saneamiento básico y la electricidad, hasta la seguridad social, la justicia, la administración pública, el empleo, etc. (Prats, 2004: 1).

Lo anterior ha provocado modificaciones en el ambiente familiar que han alterado la estructura y dinámica de las familias, sobre todo de las familias trabajadoras. Al menos esto es lo que indican las diversas formas de cohabitación fuera del matrimonio, la disminución del matrimonio, los altos índices de emigraciones, divorcio, separaciones y abandono, el incremento de familias monoparentales con jefatura femenina y reconstituidas, el aumento de embarazos en adolescentes y de madres solteras, etc. (Segalen, 1992: 13-28).

Ante el deterioro de su nivel de vida, las familias recurren a los parientes y comparten entre sí los pocos recursos de que disponen,

siendo la vivienda uno de los más compartidos. A mayor pobreza, mayor tamaño de las familias. La coresidencia les facilita el desarrollo de actividades por cuenta propia, pues les permite incorporar al trabajo informal a todos los habitantes de la casa sin importar edad ni sexo. De esta manera tratan de compartir los problemas y mejorar las condiciones de vida (Estrada, 1994: 50, 53).

Como un solo proveedor económico por familia es insuficiente, se hace necesario incorporar en forma creciente al trabajo fuera del hogar al mayor número de miembros de la familia. En esta situación, parece ser que la familia extensa no es sólo una opción sino que en las actuales circunstancias, obedece a que para las familias pobres del país que son mayoría, no es materialmente posible subsistir de otra manera (CEPAL, 1993: 24-25).

Una cuarta parte de las familias en el país son extensas. Si bien el hecho de compartir la vivienda tiene la ventaja de la incorporación al trabajo formal e informal de todos los coresidentes de la vivienda, por otro lado tiene serios inconvenientes. En los hogares super habitados, la individualización y la privacidad son anuladas por el reducido espacio, el hacinamiento y la promiscuidad. En estas condiciones, en lugar de un mayor cohesionamiento, lo que puede darse es una mayor entropía por la angustia que generan el desempleo y la escasez de recursos, que generan a su vez tensión, frustración, irritación, incomprensión, agresividad, etc. que pueden inducir al alcoholismo o al uso de drogas. Situación que se agrava por la lucha por el espacio y la imposibilidad de un descanso y sueño reparador; todo lo cual favorece la aparición de conflictos, pleitos, abuso sexual, etc. (Ruiz, 1998: 65, 130).

Los hogares reconstituidos como consecuencia del incremento del divorcio, también constituyen, a veces, ambientes poco estimulantes y enriquecedores afectiva y socialmente, por las dificultades que implica la convivencia con padrastros, madrastras y proles di-

versas, es decir, los hijos de un miembro de la pareja y del otro o de ambos, por las situaciones de violencia que generan el rechazo y trato diferencial que se puede dar entre los hijos propios y los de la otra pareja, el abuso sexual por padrastros, etc. (Ribeiro, 2000: 112-113).

Una quinta parte de las familias en México son monoparentales con jefatura femenina. Este tipo de familias son más vulnerables no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde otros puntos de vista como el que se relaciona con la crianza de los hijos, pues la incorporación de las madres al mercado del trabajo remunerado ocurre en edades que implican la presencia de hijos pequeños y/o adolescentes, cuya formación aunque las madres trabajadoras no lo quieran, descuidan al disminuir el tiempo efectivo de convivencia con los hijos, por las múltiples responsabilidades que las madres se ven obligadas a asumir como madre, como padre, como trabajadora, como proveedora del hogar, etc. Lo cual repercute negativamente en la educación de los hijos. Esta situación aplica también para las madres cónyuges que trabajan (López, 1994: 41).

Muchas mujeres han pasado a convertirse en sostén importante del presupuesto familiar, y en muchos casos su ingreso es el único. De no ser por el aporte de las mujeres, las cifras de pobreza serían aún mayores de lo que son. El aporte de las mujeres que trabajan contribuye a que una proporción importante de hogares situados sobre la línea de la pobreza puedan mantenerse en esa posición (Kliksberg, 2002b: 72).

La situación de crisis económica actual, está afectando de manera importante a las familias e incidiendo en uno de los problemas que cada día está saliendo más a la luz como es el de la violencia doméstica, problema que no sólo afecta a la familia sino que afecta también a toda la sociedad por sus repercusiones sociales, económicas, políticas, y de morbilidad y mortalidad que de ella se derivan (Aguirre, 1997: 27).

Así como la familia recibe las influencias del medio ambiente, no puede variar la organización familiar sin que las consecuencias de ese cambio se extiendan al resto de la organización social (Leñero, 1991: 25). La mayor frecuencia de la violencia intradoméstica y social en general, los delitos cometidos por menores, etc., pudieran ser expresiones indirectas de la crisis socioeconómica que se refleja en las familias (Ribeiro, 2000: 60-61, 113).

Las familias pobres no sólo enfrentan mayores dificultades y problemas, sino que además tienen un número reducido de alternativas de acción (Barreto, 2004: 84-85). La violencia doméstica responde a múltiples razones, pero una de ellas de alta incidencia, es el gran estrés socioeconómico que sufren numerosos hogares (Kliksberg, 2002a: 4). Es imposible hablar de violencia doméstica sin vincularla al ecosistema (Troya, 1993: 63).

La desigualdad está produciendo daños de toda índole. Unos son económicos como la destrucción de pequeñas y medianas empresas creadoras de buena parte del empleo. Las grandes transnacionales destruyen pequeñas y medianas empresas y generan un desempleo superior al que los sectores industriales de tecnologías avanzadas son capaces de absorber. Otros son humanos como la exclusión y la pobreza, con la constitución de vastos sectores de jóvenes sin educación ni trabajo. Otros son políticos como las tensiones sociales que atentan contra la estabilidad y la democracia. La desigualdad es una de las causas centrales del aumento de la pobreza, y aparece como la traba fundamental para que no pueda darse un crecimiento económico sostenido (Kliksberg, 2002a: 24, 30, 78, 139).

Esto no necesariamente implica que las reformas económicas llevadas a cabo no hayan contribuido al progreso económico. Éstas han propiciado avances significativos en la estabilidad macroeconómica, en los vínculos internacionales, en la integración regional, etc. Pero el área social se mantiene atrasada y en algunos casos los problemas

sociales han empeorado. El desarrollo ha sido inequitativo entre las diferentes regiones del país y al interior de los Estados (Vargas, 2002: 7).

## La violencia

La familia debía producir la felicidad de los individuos a su cargo. Sin embargo, a partir de los años setenta del siglo pasado deja de ser capaz de satisfacer estos deseos. Se rompe, toma formas inéditas. Si la familia está en situación crítica de desintegración interna como consecuencia de la crisis económica, difícilmente puede operar sanamente (Segalen, 1992: 13-28). Desde este punto de vista, la familia puede servir como impulsora o como freno del proceso de modernización entendido como la totalidad de las acciones que orientan a la sociedad hacia la consecución de un conjunto ordenado de condiciones de vida individual y colectiva que se estiman deseables con respecto a determinados valores (Mena, 1993: 5-14).

La desorganización y desintegración familiar, los conflictos y la violencia que se generan en el seno de la familia como consecuencia de los cambios sociales, repercuten negativamente en la formación de los hijos y esto se refleja en el ámbito social como inseguridad, delincuencia e inestabilidad que ponen en riesgo el frágil equilibrio social y los avances democráticos alcanzados (Rozas, 2001: 198-199, 214, 217).

La violencia no es ajena a los procesos de cotidianeidad y de transformación social. La criminalidad ha crecido paralelamente con el deterioro social: la desocupación, la degradación de la calidad de los trabajos disponibles, el crecimiento del sector informal de la economía, donde cada día más mexicanos trabajan cada vez más horas y ganan cada vez menos; y el crecimiento de la pobreza. La productividad en las ocupaciones informales es de un cuarto a un tercio de

la productividad de los puestos de trabajo en la economía formal. A esto se suman los graves problemas de cobertura y de acceso de amplios sectores de la población a servicios adecuados de educación, salud y vivienda entre otras cosas (Kliksberg, 2002a: 77-78).

Los empleos con bajos salarios propician una mayor desigualdad y someten a la fuerza de trabajo a un deterioro laboral y de capacitación que a mediano plazo se refleja en una fuerza de trabajo poco calificada, poco productiva y pobre (Pozos, 1999: 2-3). El modelo exportador adoptado basado en mano de obra barata, sólo ha permitido que un pequeño número de empresas se beneficien de los tratados comerciales con otros países (Vargas, 2002: 7).

La violencia se ha convertido en uno de los problemas principales de la gobernabilidad democrática (Bodemer, 2004: 1). El Estado está perdiendo su capacidad para imponer la ley y el orden (Castells, 1999 vol. III: 230). Al incremento de la violencia contribuye la incapacidad del sistema judicial para cumplir su cometido, lo que hace que las penas pierdan su función disuasiva, porque la posibilidad de que se apliquen es muy baja, lo cual conduce, además, al sentimiento de impunidad que experimenta la población.

Aparte de la incapacidad de los sistemas judiciales para disminuir la violencia, las prisiones, que deberían ser los sitios más seguros e instancias depositarias de personas que tras cometer un delito deben ser tratadas de modo tal que cumplan su pena y puedan reinsertarse en la sociedad, se han llegado a convertir en lugares sumamente peligrosos. También se convierten las prisiones día a día en fábricas productoras de violentos (Briceño, 2002a: 22).

Pudiera tenerse la tentación de derivar, a partir de esta cruda realidad, la conclusión de que la pobreza es la causa de la violencia, sin embargo, no existe una correlación tan clara entre estas dos situaciones, pues los países más pobres no son los que tienen las mayores tasas de criminalidad. Lo mismo ocurre al interior de los países. La

mayor violencia no se encuentra necesariamente en los estados o provincias pobres sino en los ricos (Briceño, 2002a: 14-15).

No obstante, se ha observado una estrecha relación entre la criminalidad juvenil y familias desarticuladas. La familia resulta decisiva para dimensiones básicas de la vida y la calidad de los recursos humanos de un país. Es factor esencial para el progreso tecnológico y la competitividad. La familia es el espacio donde el niño desarrolla la inteligencia emocional, las capacidades crítico creativas y forma hábitos de salud preventiva entre otras cosas. Aparece así la familia, como la principal estructura de prevención del delito en una sociedad. El papel que desempeña en el campo moral es fundamental. La criminalidad juvenil asciende y está ligada al deterioro de las familias y a la desocupación juvenil (Kliksberg, 2002a: 32, 105).

Si una familia funciona bien, impartirá valores y ejemplos de conducta en las edades tempranas que serán después fundamentales, cuando los jóvenes deban elegir en sus vidas frente a encrucijadas difíciles. Si la familia entra en proceso de desarticulación deja de cumplir dicha función. Así parecen evidenciarlo estudios como los de Whitehead (1993) en Estados Unidos, que examinó la situación familiar de una amplia muestra de jóvenes en centros de detención juvenil y verificó que más del 70% provenían de familias desarticuladas con padre ausente. Y el estudio de Katzman (1997) en Uruguay, que encontró similar correlación (Briceño, 2002a: 14).

Contra otras opiniones en contrario, para la Organización Panamericana de Salud (OPS), hay una correlación robusta entre el ascenso de la delincuencia y las tasas de desocupación juvenil. Las elevadas tasas de desocupación general son aún mucho mayores entre los jóvenes. Los altos niveles de repetición y deserción escolar están incididos por la pobreza, y también se ha visto correlación entre los niveles de educación y la criminalidad. Si aumentan los grados

de educación de una población descienden los índices delictivos (Kliksberg, 2002b: 2-4).

¿Por qué a pesar de la enorme inversión en seguridad pública y privada, las tasas de criminalidad en lugar de disminuir, aumentan? Muchos gobernantes intentan eludir y posponer soluciones de fondo a la desigualdad económica, a la inseguridad pública y a la corrupción. Un buen gobierno tiene costos para los gobernantes que sólo desean llegar vivos al próximo proceso electoral para hacerse de un nuevo cargo en el que continuarán minimizando los problemas y eludiendo su efectiva erradicación para continuar medrando con la rentabilidad del subdesarrollo (programas para pobres, despensas a cambio de votos, etc.).

Atacar en serio la desigualdad económica por ejemplo, implica reformas fiscales, la implantación de prácticas desregulatorias, la eliminación de la concentración económica, cambios de fondo a políticas tan importantes como la educación, la modernización del sistema financiero, la inversión pública en infraestructura, entre otras cosas. La pasividad de los gobiernos ante las estructuras de concentración del ingreso, va aparejada del activismo del Estado en programas sociales de corto plazo que sólo tocan la superficie de los problemas pero sin resolverlos de fondo, y simplemente los acumulan para las generaciones futuras. Lo mismo ocurre con la inseguridad pública acompañada siempre de la pobreza, la falta de oportunidades, la ausencia de una cultura de leyes y civilidad, de la corrupción, etc. (Valencia, 2005: 17).

Ante la incapacidad de las instituciones y la indefensión de la población, el linchamiento se convierte, en estas condiciones, en una forma de defensa, en una forma de justicia colectiva. Cuando una comunidad decide el linchamiento de un delincuente que la ha mantenido atemorizada, se está defendiendo de las sistemáticas agresiones sufridas y está tomando la ley en sus manos en una acción

colectiva de rabia, pero está matando. Es la pena de muerte, sólo que sin un proceso judicial legal. La acción se esconde en el anonimato que proporciona la colectividad y se escuda en la incapacidad de las autoridades. Es una conducta que, si bien puede ser la respuesta a una circunstancia violenta, es en sí misma violenta y puede contribuir a incrementar los niveles de violencia en lugar de prevenirla (Briceño, 2002b: 385, 387).

La victimización real y el miedo, provocan una actitud violenta en la población por la cual ésta está propensa a armarse, a matar para proteger la propiedad o la familia; a exigir un incremento en la severidad de las penas, a apoyar incluso la pena de muerte; a apoyar en lugar de repudiar, ya que son claramente ilegales, los excesos de la policía o militares en el caso actual, que a veces actúan al margen de la ley por iniciativa propia, como justicieros vengadores a nombre de la justicia, o como grupos de delincuentes escondidos detrás del uniforme. En otras ocasiones desgraciadamente, este tipo de violencia es promovida y/o solapada por las autoridades (Briceño, 2002a: 21).

Las raíces del crimen son múltiples y complejas. A lo largo de los siglos las causas de los delitos violentos han sido objeto de un sinnúmero de especulaciones y teorías dispares. Las diversas hipótesis suelen ser defendidas por una amplia gama de expertos y profanos, que están con frecuencia interesados en exponer a través de ellas su visión personal o ideológica de los grandes males de la humanidad.

De todas las teorías que se barajan sobre las causas del crimen violento, ninguna ha recibido tanta atención ni ha ocasionado debates tan apasionados como la que se centra en la influencia de la estructura familiar en la formación del delincuente. En los últimos años se ha expresado con fervor moral la alarma de que las nuevas familias, cuya composición no se amolda a los patrones convencionales: parejas con hijos que viven juntas sin casarse, los segundos matrimonios de divorciados que agrupan a niños de orígenes dis-

tintos o los emparejamientos de homosexuales, etc., constituyen un medio fecundo para el desarrollo de niños antisociales o psicópatas. El problema es que los defensores de estas hipótesis no toman en cuenta la proporción mucho mayor de estos hogares “diferentes” que no producen criminales, reflejan por tanto, más un compromiso ideológico con el modelo de familia tradicional que un intento serio de abordar las verdaderas fuentes del crimen.

La evidencia a nuestro alcance sugiere que el origen del criminal violento no radica en los nuevos modelos familiares, sino en los hogares azotados por el abuso y los malos tratos físicos y psicológicos. La violencia en la familia es sin duda la más dañina. Datos del Departamento de Justicia estadounidense indican que el abuso y el abandono durante la infancia, aumenta en un 53% las probabilidades de ser detenido por un acto criminal durante la juventud (Rojas, 2005: 107, 115).

Los niños y las niñas que con regularidad son testigos o víctimas de violencia muestran mayor propensión hacia los comportamientos violentos que aquellos que no han sido sometidos a estas injurias. Las más costosas y fatídicas simientes del crimen son la mutilación del espíritu del niño y la deformación de su carácter por medio de la violencia, porque semejantes daños socavan en la criatura los principios vitales del respeto por la dignidad humana, de la compasión hacia el sufrimiento ajeno y del valor de la vida, sin los cuales su comportamiento futuro está destinado a la psicopatía y a la destrucción. También es cierto que no todos los niños maltratados terminan de mayores siendo criminales violentos.

Los hogares donde con mayor frecuencia se maltrata a los menores son aquellos donde cunden las privaciones, la ignorancia, la inseguridad, el estrés y la desesperanza. A menudo se trata de padres mal preparados y sin recursos económicos o afectivos para llevar a cabo las enormes tareas y responsabilidades de la crianza, y aislados

de fuentes de apoyo como familiares, amigos y organizaciones comunitarias o servicios sociales.

El crimen florece donde reina el desequilibrio entre aspiraciones y oportunidades o existen marcadas desigualdades económicas. Especialmente fecundas para el cultivo de la delincuencia son las subculturas abrumadas por el desempleo, la pobreza, la discriminación, el alcoholismo, la drogadicción, el fácil acceso a las armas, un sistema escolar ineficaz y una política penal inconsistente, deshumanizada y revanchista. El alcohol o las drogas y la frustración, forman una mezcla explosiva. Muchas de las sustancias psicotrópicas alteran seriamente la percepción, el juicio, el autocontrol y las emociones, y fomentan comportamientos agresivos y antisociales (Rojas, 2005: 109, 112, 116-117).

## Conclusiones

El actual modelo de desarrollo económico tal como se lleva a cabo, no es la solución a los problemas sociales que enfrentamos en México, como el de la criminalidad e inseguridad, en tanto no se modifique la distribución del ingreso. La desigualdad (y la pobreza que genera), es el principal obstáculo para el desarrollo y caldo de cultivo para la criminalidad. Sin embargo, la equidad (la clave olvidada para el desarrollo) no figura en la agenda política.

Una sociedad sana se constituye con familias sanas. Pero las actuales condiciones socioeconómicas y culturales atentan contra la posibilidad de construir familias estables autosuficientes. A pesar de que en el discurso político la familia se invoca como valor, no se ven los apoyos efectivos como la generación de empleos formales con salarios dignos que mejoren el nivel de vida de la clase trabajadora y sus familias. No se ven acciones que permitan ofrecer mejores alter-

nativas a los jóvenes para garantizar un clima de seguridad social y jurídica que hagan posible un desarrollo humano sustentable. No se ven con claridad programas coherentes e integrales que conviertan el bienestar de la sociedad en tarea prioritaria, que superen la retórica y los esfuerzos aislados que se han hecho hasta ahora en ese sentido y que son valiosos pero insuficientes

La clase política ha perdido contacto con la población. Los partidos y los políticos, que deberían jugar un papel fundamental en el proceso de construcción de consensos sobre la agenda política del desarrollo, sólo ven por sus propios intereses y no representan a la sociedad y sus demandas. La política, los partidos y los actores políticos, se han convertido a la vez en el corazón del problema y de la solución. Pero los que tenemos no valen y sin embargo, hoy más que nunca necesitamos del oficio y la actividad humana más desprestigiados: la política y políticos. Se requieren grandes dosis de liderazgo, transparencia, responsabilidad y capacidad administrativa.

En general hay un desencanto de la población con la democracia, con los partidos y con los actores políticos, que se han ganado a pulso el rechazo de la sociedad por su infidelidad a sus principios, por anteponer sus intereses, los de su partido y los de los amos a que sirven, a los de los ciudadanos que son sus verdaderos patrones; por su incapacidad y corrupción, por su doble moral, y por la banalización que han hecho de la política.

No se ve una política clara a largo plazo que garantice la reestructuración productiva que sienta las bases para un crecimiento sostenible. La educación y la salud han sido el eje fundamental para contribuir al cambio social en el mundo. La ignorancia, el atraso, la necesidad, el temor, es lo que permite permanecer en sus puestos a gobernantes incapaces y corruptos. El reto es construir una sociedad civil capaz de reclamar sus derechos y obligar a los gobernantes a cumplir con su función.

Hace falta sin embargo, ampliar la cobertura educativa en todos sus niveles y promover a través de la educación una cultura política que permita que los ciudadanos conquisten sus derechos fundamentales y construir un horizonte de futuro. Un pueblo ignorante es tierra abonada para la demagogia. Un pueblo educado sabrá distinguir entre un discurso serio y una prédica demagógica; sabrá elegir gobernantes honestos y no permitirá incompetentes ni corruptos. Sin embargo, también parece que la educación no es un asunto prioritario. Cada año una gran cantidad de jóvenes no pueden acceder a la escuela como tampoco a un empleo. La necesidad puede orillar a algunos a quebrantar la ley. La mayor parte de los agresores son jóvenes entre 18 y 35 años.

No se puede descuidar a la familia porque constituye un pilar básico para el desarrollo y es factor esencial para el progreso, porque es decisiva para dimensiones básicas de la vida y la calidad de los recursos humanos que en su seno se forman. A pesar del enorme costo de la violencia y de la gran inversión en seguridad, la criminalidad y la inseguridad pública son mayores cada día. Y esto seguirá en ascenso si a las medidas de corto plazo no se acompañan políticas a largo plazo como son las educativas y la reactivación del aparato productivo para proporcionar el empleo que la población demanda. Si no se ofrecen oportunidades de desarrollo a la población general y particularmente a los jóvenes. Si no se mejora la calidad de vida de la población.

Al incremento de la violencia contribuye la incapacidad del sistema judicial para cumplir su cometido, lo que hace que las penas pierdan su función disuasiva, porque la posibilidad de que se apliquen es muy baja, lo cual conduce, además, al sentimiento de impunidad que experimenta la población. La incapacidad del sistema judicial es evidente y la corrupción y la impunidad en él son asombrosas.

Los efectos negativos del capitalismo como la alarmante criminalidad pueden ser corregibles mejorando las condiciones materiales

de vida de la población. La economía del país se puede organizar según los intereses del grupo dominante o según los intereses de la mayoría. La elección de una de estas alternativas no proviene de la economía, sino de la política.

## Bibliografía

- AGUIRRE ZURITA, Patricia (1997). "La violencia contra la mujer", *Realidades*, número 6, agosto, Monterrey, Nuevo León, México, Universidad Autónoma de Nuevo León,
- BARRETO CORTÉZ, Estela (2004). "Opresión política y social: el caso del mal-estar de menores", *Análisis*, vol. V, número 1, Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico,
- BECK, Ulrich (1998). ¿Qué es la globalización? Barcelona, Paidós.
- BODEMER, Klaus (2001). *Violencia e inseguridad pública*, Barcelona, Instituto Internacional de Gobernabilidad, <http://www.iigov.org/RedGob/bodemer.htm>. Consultado el 16 de junio de 2006.
- BRICEÑO LEÓN, Roberto (2002a). "La nueva violencia urbana en América Latina", en su *Violencia, Sociedad y Justicia en América Latina*, Caracas, Venezuela, CLACSO.
- (2002b). "El derecho a matar en América Latina", en su *Violencia, Sociedad y Justicia en América Latina*, Caracas, Venezuela, CLACSO.
- CASTELLS, Manuel (1999). *La era de la información*, volumen III, México, Siglo XXI.
- CASTRO, Raúl (2005). "Lo político ha frenado la economía", Guadalajara, Jalisco, México, *Diario Público* del 29 de septiembre.
- CEPAL (1993). *Cambios en el perfil de las familias: la experiencia regional*, Santiago de Chile.
- ESTRADA IÑIGUEZ, Margarita (1994). "Dos maneras de enfrentar el desempleo", *Signos*, número 2, abril, Guadalajara, Jalisco, México.

- FILGUEIRA, Carlos (1999). "Bienestar y ciudadanía. Viejas y nuevas vulnerabilidades", en Tockman, Víctor y Guillermo O'Donnell, *Pobreza y desigualdad en América Latina*, Buenos Aires, Paidós.
- KLIKSBERG, Bernardo (2002a). "El crecimiento de la criminalidad en América Latina: un tema urgente", *Magazine DHIAL* número 29, mayo, Barcelona, Instituto Internacional de Gobernabilidad, disponible en [www.iigov.org](http://www.iigov.org) Consultado el 14 de mayo de 2005.
- (2002b). "La discriminación de la mujer en el mundo globalizado y en América Latina. Un tema crucial para las políticas públicas", *Boletín* número 123, del 17 de diciembre, Barcelona, Instituto Internacional de Gobernabilidad, disponible en <http://www.iigov.org>. Consultado el 2 de julio de 2005.
- LAURELL, Asa Cristina (1997). *La reforma contra la salud y la seguridad social*, México, Ediciones Era.
- LEÑERO OTERO, Luís (1991). "El niño sin familia y sin sociedad propia", Memoria del Primer Foro Nacional del Menor en la calle, celebrado del 13 al 15 de junio en Colima, Colima, México.
- LÓPEZ BARAJAS, María DE LA PAZ y Haydee IZAZOLA CONDE (1994). *El perfil censal de los hogares y las familias en México*, México, INEGI.
- MENA, Carlos; Mariana AYLWIN y Cristian GAZMORI (1993). *La familia en Chile*, Santiago de Chile, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos.
- OSORIO, Saúl y Berenice RAMÍREZ (1997). *Seguridad o inseguridad social: los riesgos de la reforma*, México, Triana Editores.
- PNUD (2005). Indicadores socioeconómicos sobre México, México, Agora.net. <http://www.agora.net/mex/analisis/estadisticasociec.htm> Consultado el 20 de abril de 2007.
- POZOS, Fernando (1999). "Aumento del empleo en Jalisco: la realidad de un mito", *Gaceta Universitaria* del 26 de abril, Guadalajara, Jalisco, México, Universidad de Guadalajara.
- PRATS, Joan (2004). "Ojo al dato: otra mirada sobre la globalización", *Revista Internacional de Gobernabilidad para el Desarrollo*, número

0 del 11 de marzo, Barcelona, Instituto Internacional de Gobernabilidad, disponible <http://www.iigov.org> Consultado el 10 de septiembre de 2006.

RIBEIRO FERREIRA, Manuel (2001). *Familia y Política social*, Buenos Aires, Humanitas.

ROJAS MARCOS, Luís (2005). *Las semillas de la violencia*, Madrid, Litografía Rosés, S. A.

ROZAS PAGAZA, Margarita (2001). *La intervención profesional en relación con la cuestión social*, Buenos Aires, Espacio Editorial.

RUIZ GARZA, Mauricio (1998). *Menores infractores. Una pedagogía especializada*, México, Ediciones Castillo.

SOTELO VALENCIA, Adrián (2003). *La reforma laboral en México*, México, rebelión.org. [www.rebellion.org/economia/030823abascal.htm](http://www.rebellion.org/economia/030823abascal.htm) Consultado el 3 de marzo de 2005.

TROYA, Estela (1993). "La pareja: pareja romántica y pareja concertada. Dos modalidades contemporáneas de formación de pareja", en Ignacio Maldonado *Familias: una historia siempre nueva*, México, UNAM-Porrúa.

VALENCIA, Juan Gabriel (2005). *La rentabilidad política del subdesarrollo*, Guadalajara, Jalisco, México, Diario Público del 23 de julio.

VARGAS HERNÁNDEZ, José G. (2002). *La transición económica y política del Estado mexicano en el umbral del siglo XXI: del ¿Estado empresario al Estado de empresarios*, Barcelona, Instituto Internacional de Gobernabilidad, Biblioteca de Ideas, Colección de Papers, <http://www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/papers/paper0037.htm>. Consultado el 23 de febrero de 2004.